

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

AUTO INTERLOCUTORIO N° 081

(Mediante el cual se confirma Auto que negó decreto de prueba)

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: WILLIAM GARCÍA GUTIÉRREZ
Demandados	: BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A.
Radicado	: 05001 31 05 023 2019 01078 01
Providencia	: Auto resuelve sobre decreto de pruebas
Temas y	: Seguridad Social- Apelación contra Auto que niega
Subtemas	decreto de inspección judicial a correo electrónico -.
Decisión	: Confirma decisión de Primera Instancia

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, que se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 6 de octubre de 2003 hasta el 4 de octubre de 2018, cuando fue terminado por el trabajador por causas atribuibles a la demandada; se condene al pago de indemnización contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, comisiones adeudadas del año 2018, indemnización moratoria, indexación, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma, en términos generales, que el demandante se vinculó laboralmente con la demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido, a partir del 6 de octubre de 2003, desempeñándose como representante de ventas y visitador médico; el 13 de enero de 2004 suscribió nuevo contrato; el 3 de junio de 2012 fue nombrado como gerente de distrito y rotación en la Regional Antioquia; a finales del año 2017 empezaron a cambiar las condiciones, con altas cargas laborales, debía cumplir a sus superiores en horas extras que no le pagaban, enviaba correos electrónicos hasta altas horas de la noche; el 17 de octubre de 2017 la demandada mediante correo electrónico le informó que desde noviembre de ese año se abriría la línea de productos Sabro Sucaryl, con un plan de incentivos por ventas y cartera; no le fueron pagadas las comisiones reclamadas por varios meses del año 2018; ante la presión ejercida por sus superiores, presentó renuncia el día 4 de octubre de 2018 a partir

del día 6 siguiente, argumentando afectaciones emocionales y anímicas, trabajo de 17 horas diarias, discriminación, desautorizaciones frente a los compañeros, no pago de comisiones, asignación de estelas de ventas imposibles de cumplir, afectación a su autoridad delante de los clientes, todo documentado en el correo electrónico institucional. La demandada respondió el día 5 de octubre de 2018 negando todas las circunstancias descritas.

Respuesta a la demanda:

Biochem Farmacéutica de Colombia S.A. a través de apoderado, admitió la existencia de un único contrato de trabajo a partir del día 13 de enero de 2004, el ascenso a Gerente desde el 1º de julio de 2010, la apertura de la línea *Sabro* e incentivos y comisiones que se pagaban a partir del 80% pero con condiciones, sin que el actor cumpliera la meta asignada en el distrito que gerencié y así se le comunicó en respuesta a su reclamación y a la carta de renuncia. Se opuso a las pretensiones y formuló excepciones.

En el trámite de la audiencia correspondiente, el Juzgado evacuó la etapa de decreto de pruebas, negándose la inspección judicial con exhibición de documentos solicitada por el demandante respecto “*de todos los documentos que se encuentren en poder de la empresa especialmente en el correo electrónico williangarcia@biochemfarmaceutica.com”*; explicó la Juez que **la prueba solicitada es innecesaria**, por cuanto la sociedad demandada aportó con la respuesta los documentos que se encontraban en su poder y que están relacionados con el objeto del litigio, con los

correos electrónicos allegados por el demandante se suple el requerimiento. Al resolver el recurso de reposición manifestó que **el objeto de la prueba puede ser demostrado con los demás medios decretados, además, se presenta indefinición y falta de concreción sobre los mensajes electrónicos requeridos, no siendo viable la inspección solicitada.**

Recurso de Apelación:

El apoderado del demandante sostiene que lo adosado por la demandada no se compadece con lo que se busca probar, ya que con la **inspección al correo corporativo asignado al señor William a lo largo de 14 o 15 años**, se demostrará hasta qué horario concreto trabajaba, qué metas y situaciones se presentaron en virtud del *ius variandi*, siendo la sociedad Biochem quien se encuentra en mayor facilidad de aportar la documentación y pudo no exhibir la totalidad al responder la demanda; lo que tiene relevancia ya que el trabajo en calidad de gerente se desarrollaba en más de un 80% vía correo electrónico con reporte de informes y metas.

Alegatos de conclusión:

El apoderado del demandante reiteró argumentos expuestos al sustentar el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir radicar en verificar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia; analizándose la procedencia de decretar inspección judicial con exhibición de todos los documentos que se encuentren en correo electrónico operado por el señor García Ramírez al servicio de Biochem Farmacéutica de Colombia S.A., desde los años 2003 o 2004 y hasta 2018.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar el Auto recurrido; por las siguientes razones:

De conformidad con los artículos 48 y 53 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificados por la Ley 1149 de 2007, **el Juez como Director del proceso cuenta con facultades para propender que éste se lleve a cabo con todas las ritualidades establecidas, atendiendo a los principios de economía y celeridad;** por tanto, **es admisible y plausible** que más ahora, donde opera la oralidad, existiendo inmediatez en la conducción de las audiencias y práctica directa de las pruebas, **controle que sean conducentes, eficaces, útiles y necesarias;**

rechazando las inconducentes o superfluas con relación al objeto del pleito; sin que dicha discrecionalidad lo lleve al otro extremo, de negar el debido ejercicio del derecho de defensa o el de las cargas probatorias, con libertad; pues recuérdese que no solo conoce del proceso el Juez en Primera Instancia, sino que puede llegar a conocerse por este Tribunal y la misma Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

Sobre el tema, establece el artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que “...*El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito...*”; de lo cual se extrae que la prueba puede ser rechazada, **motivadamente**, cuando es **inconducente** o **superflua**, debiéndose entender por la primera de las acepciones, que el hecho no puede demostrarse mediante determinado medio probatorio, lo cual hace referencia al análisis por parte del operador jurídico, de una cuestión de derecho, respecto a la factibilidad de probar determinada circunstancia con el medio probatorio solicitado. **En tanto la prueba superflua**, es la que se torna **innecesaria**, al haberse practicado ya las suficientes para adquirir certeza sobre el hecho.

Respecto a la solicitud y decreto de pruebas, **la parte interesada tiene el deber de procurar conseguir las que son de su interés, antes de acudir ante la Administración de Justicia;** así mismo, **es su deber presentar con la demanda y la respuesta, todas las pruebas en las que sustenta los hechos que son fundamento de sus pretensiones o excepciones** y no desplazar esa carga a la actividad judicial, entre otras razones, porque corre el riesgo de que no lleguen al proceso.

Así mismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, según el cual, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto, formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes.

En este caso, la *a quo* sustentó la negativa del decreto de la prueba, en que es **innecesaria** la inspección judicial y exhibición de documentos contenidos en el referido correo electrónico, al considerar que **el objeto de la prueba puede ser demostrado con los demás medios decretados, además, se presenta indefinición y falta de concreción sobre los mensajes electrónicos requeridos.**

Al respecto, **encuentra esta Sala de Decisión Laboral** que, si bien es cierto, procede el recurso de Apelación contra el Auto que niegue el decreto de una prueba (numeral 4° del artículo 65 del CPTSS); también lo es que el inciso final del artículo 236 del Código General del Proceso aplicable por remisión analógica del 145 del Código Procesal Laboral, contempla en forma muy precisa, que el Juez puede negarse a decretar la inspección si la considera innecesaria por contar con material probatorio suficiente para resolver –siendo este el fundamento de la *a quo*–, decisión que no es apelable: “...***El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso*** o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. ***Contra estas decisiones del juez no procede recurso...***” (Negritas fuera de texto).

Conforme al artículo 54B del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, las partes pueden pedir la exhibición de documentos y de acuerdo al artículo 55 ibídem, **el Juez podrá decretar la inspección judicial “Cuando se presenten graves y fundados motivos o para aclarar hechos dudosos”**, circunstancias de gravedad fundada que no fueron siquiera alegadas por el recurrente y tampoco se advierten en el asunto bajo estudio.

De otro lado, el inciso 2° del artículo 236 del Código General del Proceso señala que, salvo disposición en contrario, **solo se ordenará la inspección “cuando sea imposible” verificar los hechos por cualquier otro medio de prueba¹** y como se explicó en precedencia, la *a quo* sustentó la decisión de negar la inspección judicial por encontrarla innecesaria, por existir otros medios de prueba que pueden suplir, reemplazar o sustituir el objeto de la solicitada por el demandante.

Adicionalmente, recuérdese que el Juez como Director del proceso, tiene el deber de controlar la admisión y decreto de pruebas procurando que sean eficaces y útiles, características que no ofrecería la práctica de la prueba pedida, ya que **la inspección a un correo corporativo utilizado por el demandante a lo largo de 14 o 15 años** –como detalló el apoderado recurrente–, corresponde a una **tarea bastante amplia y dispendiosa en el tiempo**, que finalmente no resulta útil para el proceso, atendiendo a que es genérica y carente de precisión, pues ni siquiera se concretan lapsos, periodos, personas o direcciones de correo electrónico con los cuales se cruzaban las comunicaciones y en ese contexto, se hace inviable la práctica de la prueba, tal

¹ Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videgrabación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro

como explicó el Juzgado; información que pudo haber solicitado previo a la presentación de la demanda.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente **confirmar** la decisión de Primera Instancia.

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo del demandante al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, fijándose como agencias en derecho medio salario mínimo legal mensual vigente (\$580.000) en favor de la demandada; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el Auto de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa; conforme a lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Se condena en **Costas** de Segunda Instancia a cargo del demandante **William García Gutiérrez**, fijándose como agencias en derecho medio salario mínimo legal mensual vigente (\$580.000) en favor de **Biochem Farmacéutica Colombia S.A.**; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** electrónicos, se ordena devolver el proceso al Despacho de origen y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada Ponente



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
Estados No **193** del **10 de noviembre de 2023**

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>